

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-34921-2017
CARATULADO : MAILLARD/FISCO DE CHILE

Santiago, dieciséis de Septiembre de dos mil diecinueve .-

VISTOS:

Al folio 1 comparece don Edmundo Mauricio Maillard Mancilla, jubilado, domiciliado para estos efectos en Agustinas 1410, piso 1º, comuna y ciudad de Santiago, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios por Crimen de Lesa Humanidad en contra del Fisco De Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, con domicilio en Agustinas 1687, comuna y ciudad de Santiago.

Funda su pretensión en los delitos que sufrió en manos de funcionarios del Estado, militares y funcionarios públicos, consistentes en su detención y posterior prisión ilegítima, lugar en donde señala haber sido torturado y sometido a penas y tratos crueles y degradantes, ocasionando con ello serios daños en su salud física y, sobre todo, psicológica, dañando de modo permanente su entorno personal, familiar y social.

Sitúa los hechos en lo acontecido en nuestro país el día 11 de septiembre del año 1973, en que los Militares derrocaron el gobierno de Salvador Allende, dando inicio a una política de persecución contra un sinnúmero de ciudadanos chilenos, señalando que por medio del Decreto Ley N° 5 del 12 de septiembre de 1973, se declaró *Estado de Guerra Interna*, dando inicio a una política de represión que tenía por objetivo el exterminio de algunos grupos nacionales que tuviesen pensamientos ideológicos distintos, indicando que en este contexto, el día 12 de septiembre de 1973 alrededor de las 16:00 horas al término de su jornada laboral, fue detenido y trasladado a Cerro Sombrero, a una casa particular que era propiedad de la Empresa Nacional del Petróleo: ENAP, donde trabajaba, inmueble que fue tomado por los militares y acondicionado como un cuartel, donde llevaban a personas detenidas, siendo recluido en su sótano y experimentando situaciones muy intimidantes, durante 3 días, siendo encadenado y trasladado, el día 15 de septiembre al Regimiento Motorizado N° 10 de Pudeto en Punta Arenas, sin



saber cuál era el motivo de su detención hasta ese momento.

Indica que en su estancia en el Regimiento, fue ubicado en un gimnasio con aproximadamente unos 400 hombres más, entre quienes se encontraba el ex diputado Carlos González Jaksic, Alejandro Olate y varios compañeros de trabajo, de otras áreas de ENAP.

Expone que en una oportunidad fue apartado para ser interrogado por un comandante de apellido Pons, quien luego de varias preguntas le señaló que la detención se debía a haber sido acusado de activismo agrario, a lo que intentó explicar que era un simple trabajador de la Empresa Nacional del Petróleo y que no tenía ningún tipo de vínculo con temas agrícolas, siendo enviado nuevamente al gimnasio, pasando varios días en ese lugar, para ser posteriormente encapuchados, amordazados y dirigidos, el día 25 o 30 de octubre, al centro de tortura actualmente conocido como "el Palacio de la risa", siendo torturado de diversas formas junto a sus compañeros, relatando que más tarde ese día lo llevaron a una sala contigua, colocando uno de los militares el cañón de una pistola en su cabeza, percutando un disparo, sin que la bala saliera, provocándole una profunda angustia, siendo además interrogado por el jefe de ese centro de detención, sobre su entrenamiento militar, desde hace cuánto tiempo se encontraba dedicado al activismo político y agrícola, cuál era su partido político, etc.

Explica que pese a que no tenía respuestas con información a las preguntas que le hacían, firmó todos los documentos que le presentaron, dentro de ellos un documento en el cual declaraba no haber sido torturado ni víctima de algún tipo de maltrato.

Agrega que sin embargo, fue increpado por un militar, diciendo que no le creía y sometido a diversos tipos de tortura, entre ellos "la parrilla", aplicándole electricidad en diversas partes del cuerpo, en particular, en la zona de los testículos, perdiendo finalmente el conocimiento y siendo trasladado nuevamente al gimnasio, donde pasaron días sin dormir, caminando en círculos y siendo golpeados.

Expone que el día 14 de noviembre del año 1973, luego de dos meses y un par de días detenido y torturado, le fue entregada una carta de "*Ciudadano sin problemas*", ya que no lograron constatar ningún tipo de vínculo con grupos subversivos pero que, de todas maneras, seguiría bajo vigilancia, informándole que si quería regresar a ENAP debía renegociar su entrada en la Planta Manantiales, ya que había firmado, supuestamente, un finiquito, reconociendo su firma en el documento, el que suscribió vendado y bajo



torturas, motivo por el cual quedó sin trabajo, siendo desvinculado y perdiendo por ende, todos sus beneficios laborales y años de servicio en ENAP, sintiendo culpa por el sufrimiento causado a su familia de manera injusta, logrando sólo después de 3 años, estabilizarse y trabajar de manera independiente.

Señala que en el caso de marras, es evidente cómo el Estado De Chile ha faltado a sus obligaciones de respeto a sus Derechos Fundamentales, los que no solamente han sido transgredidos sino que, más grave aún, fueron transgredidos e infringidos por los propios agentes del Estado, permaneciendo el Estado en una constante actitud de pasividad, situación que sólo podría revertirse mediante la obligación de resarcir los perjuicios provocados y ocasionados por la omisión, citando al efecto el artículo 5o de la Constitución Política de la República, inciso 2o, que armoniza la obligación que recae sobre el Estado de permanecer en una actitud positiva frente a la vulneración sistemática de garantías constitucionales, obligaciones propias de un Estado Democrático de Derecho, consagrado en los artículos 6 y 7 de la norma fundamental tantas veces citada.

En el mismo orden de ideas, cita el artículo 4 de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, que atribuye al Estado la responsabilidad de los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

En cuanto a la naturaleza de la responsabilidad del Estado, afirma que esta es de Derecho Público y que por tanto se excluye la aplicación de las normas civiles y, en este sentido, no se aplicarían los plazos de prescripción establecidos por el Código Civil en el caso de marras, asimismo señala, que la responsabilidad del Estado es solidaria por los hechos de sus agentes, aun incluso si su actuación no responde a la orden de un superior, afirmando que de acuerdo a la doctrina, en esta materia han de determinarse a lo menos 2 elementos de carácter básico: a) Infracción a una obligación internacional del Estado en materia de Derechos Humanos; y b) Dicha infracción sea atribuible al Estado, conforme a reglas de imputación de responsabilidad del Derecho Internacional Público.

En cuanto a la atribución de responsabilidad internacional del Estado, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención, y en tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una



institución de carácter público lesione indebidamente tales derechos, se esté ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en este artículo, agregando en el considerando inmediatamente siguiente que la conclusión a la que han llegado es independiente de que el órgano o el funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial por las omisiones de los mismos, aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación de derecho interno, citando jurisprudencia y sosteniendo que resulta evidente que el deber del Estado de reparar el daño causado da lugar al derecho a exigir una reparación de carácter integral de las víctimas en casos de violación a los Derechos Humanos.

Seguidamente se avoca a la extensión del concepto reparación integral, exponiendo que al respecto el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado mientras duró la violación, a futuro, busca garantizar al lesionado el goce del derecho o la libertad conculcados, y en caso de no ser así, faculta a la Corte a imponer una reparación, sostiene que conforme a esto esta obligación de reparación se erige como consecuencia directa y necesaria de la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado, siendo en definitiva, el derecho a la reparación integral reconocido ampliamente por el Derecho Internacional y deriva del bloque constitucional chileno de Derechos Humanos, que obliga al Estado a reparar la lesión al no poder volver la situación al estado anterior a la vulneración de aquellos derechos.

Alega que la acción destinada a obtener una indemnización de perjuicios derivada de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible al igual que la acción penal, como se encuentra señalado por la Excelentísima Corte Suprema citando doctrina y jurisprudencia en el mismo sentido, entendiendo sin embargo, que es posible que la discusión de la imprescriptibilidad suscite la duda sobre la naturaleza de la acción que se ejerce en el caso, ya que iniciar un juicio de indemnización de perjuicios podría implicar calificar la acción como patrimonial, lo que la privaría de gozar de la protección de imprescriptibilidad, explica sin embargo, que ese punto de vista soslaya las grandes diferencias existentes entre la mera acción patrimonial y la acción de la que goza la víctima de este tipo de delitos, por lo que el enfoque realmente correcto es que la acción indemnizatoria de responsabilidad extracontractual del Estado por delitos de lesa humanidad no



es de índole patrimonial sino que de carácter humanitaria, debiendo imperativamente aplicarse las normas constitucionales para hacer efectiva las responsabilidades del Estado.

En cuanto a la naturaleza de la acción que se ejerce para obtener una indemnización, indica que el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que *"los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán"*, no distinguiendo entre la acción penal y la acción civil, siendo esto reafirmado por el artículo 75 del mismo Estatuto. Agrega que en la materia, en virtud del principio de coherencia del ordenamiento jurídico, se deduce que la acción que se interpone en el caso sublite no prescribe, toda vez que donde el legislador no distingue, no corresponde al intérprete distinguir y además, a la misma razón, misma disposición. Por ello, no es permitido al juez distinguir, cobrando especial relevancia el principio pro nomine, por cuanto, los Derechos Humanos se rigen por principios derivados de un orden jurídico internacional que exige una interpretación amplia de los mismos.

En relación a los perjuicios causados que demanda señala que estos consisten en daños extrapatrimoniales o daño moral, consecuencia directa del actuar dañoso de los funcionarios del Estado, traducidos en todo el sufrimiento grave y angustia causada por la detención arbitraria e ilegal y las torturas de las que fue víctima en los meses de septiembre a noviembre de 1973, constituyendo este actuar la relación de causalidad en que funda dichos perjuicios, los que avalúa en la suma de \$70.000.000, como reparación del daño sufrido, monto que debe ser pagado por el demandado.

En mérito de lo expuesto y previa cita de las disposiciones legales pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, someterla a tramitación, acogerla en todas sus partes y, declarar en definitiva, que se condene al Fisco de Chile a pagarle la suma de \$70.000.000, por los perjuicios morales que ha sufrido producto de la tortura y detención arbitraria de la que fue víctima a partir del día 12 de septiembre de 1973, o la suma que esta juez estime conforme a derecho, más los intereses y reajustes que esta cantidad devengue desde la presentación de esta demanda hasta el momento del pago efectivo, condenándose en costas a todo evento al demandado.

Al folio 8, doña Ruth Israel López, por el Fisco de Chile contestando la demanda de autos, opuso excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante e identifica las prestaciones en dinero y otros medios de compensación dirigidos a la reparación integral de las víctimas; agrega las reparaciones que, conforme a las leyes nacionales de reparación



del Estado de Chile, han obtenido los demandantes, incluyendo beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la entrega de una cantidad de dinero, así como también transferencias directas en dinero.

Repara en la complejidad reparatoria, expresando que en lo que respecta a justicia transicional fueron 3 objetivos a que se abocó entonces el Presidente Patricio Aylwin: (a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Añade que orientada al segundo objetivo, la Comisión Verdad y Reconciliación, en su informe final propuso una serie de propuestas de reparación, entre ellas una pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas y algunas prestaciones de salud. El referido informe sirvió de causa y justificación al proyecto que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Observa que durante el proceso de formación de esta ley se tuvo presente en todo momento que su objetivo era reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas, haciendo referencia a diversas expresiones en tal sentido, promoviéndose, según indica la demandada, la reparación del daño moral de las víctimas.

En este punto, establece 3 tipos de compensaciones: (a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; (b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre las prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas. Se limita en primer lugar a desglosar los montos desembolsados por el Estado de Chile, entrega además, un listado con las reparaciones específicas señalando que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, \$1.480.284 para beneficiarios de 70 años o más y de \$1.549.422, para mayores de 75 años; adiciona que el actor pudo recibir recientemente el aporte único de reparación de la Ley 20.874 por \$1.000.000.

Finalmente entrega un listado de actos simbólicos destinados a la reparación de los daños morales de las víctimas. Concluye señalando que existe identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

Opone, además, excepción de prescripción extintiva, conforme a las reglas del artículo 2332 del código Civil en relación a lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo, ya que conforme al relato del actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió desde el día 12 de septiembre de 1973 y hasta el día 14 de noviembre del mismo año, y ante el



entendido que estas acciones no pudieron ser ejercidas, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de esta demanda, esto es, el día 18 de enero de 2018, han transcurrido en exceso el plazo de 4 años establecido en el artículo 2332, mencionado, debiendo acogerse la excepción de prescripción y rechazarse la acción indemnizatoria deducida.

En subsidio alega la prescripción ordinaria de 5 años, en relación a lo dispuesto por los artículos 2515 y 2514 del Código Civil, por cuanto señala que la imprescriptibilidad es excepcional, reforzando esta idea cita jurisprudencia que reza, “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Indica que es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público en base a lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, explicando que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado. Señala además que el fundamento mismo de la prescripción sigue un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Cita, al efecto, sentencia de unificación de jurisprudencia de 21 de enero de 2013, de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que establece que el principio general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad de la acción civil, que los tratados internacionales relacionados con la materia no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; añade que la imprescriptibilidad que alguno de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; que del mismo fallo se desprende que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, finalmente, alude a la sentencia para señalar que el plazo debe contarse, no desde la desaparición o detención del demandante, sino desde que el titular de la acción indemnizatoria tuvo conocimiento y conto con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia, solicitando a esta juez rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, alega la naturaleza y el excesivo monto pretendido de \$70.000.000, sosteniendo que en términos generales la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para situarla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.



Continúa, señalando que el daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante un valor que sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, no pudiendo considerarse, además, la capacidad económica del demandante para fijar o determinar dicho monto, el que resulta de todas formas excesivo.

En subsidio, de las excepciones precedentes de prescripción y reparación integral del daño, alega que la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación y que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales.

Finalmente, sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada, considerando que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia acoja la demanda y establezca dicha obligación y además, solo una vez, que aquella se encuentre firme y ejecutoriada.

En consideración a lo expuesto solicita tener por contestada demanda civil y en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto pretendido.

Al folio 14, la demandante evacuó la réplica de la demandas señalando que todas las afirmaciones sostenidas por el Fisco son erradas, las que se reducen sólo a señalar argumentos formales, solicitando que estas sean rechazadas y que la demanda de autos sea acogida en todas sus partes.

En primer lugar y en cuanto a la improcedencia de la acción civil de indemnización de perjuicios por haber ya sido indemnizado el demandante, evidenció que el Consejo de Defensa del Estado, en su contestación no contravirtió la situación concreta de una necesidad de reparación y si bien, no se puede desconocer que se hayan efectuado esfuerzos por compensar a estas víctimas mediante pensiones asistenciales y simbólicas, estas han tenido un carácter general en procura de una solución uniforme y abstracta, más sin considerar las circunstancias, no encuadrándose en el texto del artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el que obliga al pago de una justa retribución a los lesionados, cantidades que evidentemente no guardan relación con la normativa internacional, no existiendo incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que se persiguen, ni se ha demostrado que fue diseñada para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos.



Hace presente que Chile ya ha sido obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reparar debidamente a las personas que han visto lesionados sus derechos fundamentales, por medio de un histórico pronunciamiento la Corte IDH, estableciéndose en variadas ocasiones que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, citando jurisprudencia al respecto.

Refuta la excepción de prescripción extintiva, alegada por el Fisco, indicando que tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en que, si bien este tipo de acciones indemnizatorias, tienen un carácter patrimonial, no por eso pierden su índole humanitaria, de derechos humanos reconocidos en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que prima sobre la normativa interna, en especial, sobre el artículo 2497 de nuestro Código Civil, otorgando como razones para rechazar la excepción opuesta que estamos ante una acción que se fundamenta en normas de Derecho Internacional, que comprenden la imprescriptibilidad del deber de reparar que pesa sobre el Estado agresor de Derechos Humanos; y (ii) Ha sido el propio Fisco quien ha reconocido tanto la existencia de la obligación como su deber de pagar, con lo que ha operado la renuncia a la prescripción.

Sostiene que este reconocimiento de la existencia de la obligación y su exigibilidad por parte del demandado cuando declara que esta obligación se ha pagado, y es más se continuaría pagando por medio de las prestaciones sociales periódicas, comprueba que el deber de reparar existe y, no solo que existe sino que, además, es actualmente exigible, siendo del todo contradictorio el que se alegue posteriormente una supuesta prescripción.

En cuanto al ataque que el Fisco sostuvo de las normas internacionales invocadas, acusa que de aceptarse lo sostenido por el demandado el Estado estaría incumpliendo los compromisos que ha adquirido internacionalmente.

Por otra parte ataca la difícil evaluación del daño moral que el demandado alegó en su contestación, explicando lo que se busca obtener de esta demanda, es la satisfacción pecuniaria equivalente al daño causado, superando los perjuicios sufridos con creces los inconvenientes que se pueden vivir en situaciones complejas de la vida; llegando a producir aflicción, temor, detrimento en su concepción de normalidad, aún más por la naturaleza de su atacante, primero por su investidura, y luego por la concepción moral que el demandante tenía de la representación del mismo, como ente protector, agregando que, sin tener en consideración la capacidad económica que pueda tener el afectado o el responsable del daño, ha atendiendo únicamente a que se ha causado un daño, un perjuicio, y que éste debe ser reparado.



Al folio 16, el demandado evacuó el trámite de duplica, reiterando las alegaciones, excepciones y defensas de la contestación de la demanda.

A folio 22, se recibió la causa a prueba en autos.

A folio 64, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en esta sede civil compareció don Edmundo Mauricio Maillard Mancilla, quien interpuso demanda de indemnización de perjuicios por Crimen de Lesa Humanidad, solicitando que se condene al Fisco de Chile a pagarle la suma de \$70.000.000, por los perjuicios morales que ha sufrido producto de la tortura y detención arbitraria de la que fue víctima a partir del día 12 de septiembre de 1973, o la suma que esta juez estime conforme a derecho, más los intereses y reajustes que esta cantidad devengue desde la presentación de esta demanda hasta el momento del pago efectivo, con costas.

Basa su demanda en los hechos ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contestó demanda sobre indemnización de perjuicios, solicitando su total rechazo, alegando la excepción de reparación integral del daño fundado en que el demandante ha sido indemnizado, recibiendo una pensión anual y en forma reciente el Aporte Único de Reparación de la Ley 20.874 por \$1.000.000, como gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) y beneficios educacionales y de vivienda; y también reparaciones simbólicas.

Asimismo opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles, todo ello de acuerdo a las normas y jurisprudencia que cita y que ya fueron señaladas en la parte expositiva de este fallo. En subsidio de lo expuesto, sostiene que la cifra reclamada, como daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas adoptadas por el Estado de Chile; agregando que resulta improcedente el pago de los reajustes, los que sólo proceden desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

TERCERO: Que en sus escritos de réplica y duplica, las partes reiteran las alegaciones, excepciones y defensas de la demanda y contestación respectivamente.

CUARTO: Que para acreditar sus afirmaciones, la demandante rindió prueba testimonial y documental, no objetada de contrario consiste en:



Prueba Documental:

En el anexo de folio 1:

1. Copia de Cedula Nacional de Identidad de don Edmundo Mauricio Maillard Mancilla.

2. Copias simples de sentencias de término pronunciadas por la Excelentísima Corte Suprema, en autos Rol N° 4006-2003, caratulados “Albornoz Amaya Sergio con Ortiz Farías Miguel”; Rol N° 672-2011, caratulados “Quiñones Reyes Marcela, Quiñones Reyes Mauricio con Fisco de Chile”; Rol N° 796-2016, caratulados “Pinto Nanjari Andrés Avelino con Fisco de Chile”.

“Nómina de personas reconocidas como víctimas”, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech I), en la que aparece el actor signado con el N°19.741.

3. Al anexo del folio 34, Copia simple de la página del informe de la “Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados” confeccionada por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II), en la que aparece el actor signado con el N°4895

4. Al folio 54, Copia de Informe del Servicio Médico Legal, remitido con fecha 10 de julio de 2019, sobre las facultades mentales de Edmundo Mauricio Maillard Mancilla, de 78 años de edad, expedido por el profesional médico psiquiatra forense Iván Lailhacar Formigo, consistente en evaluación mediante entrevista psicológica, donde se concluye la existencia de un trastorno por estrés post traumático reactivo a los hechos denunciados en esta causa.

Prueba testimonial:

Al folio 33, consta la prueba testimonial ofrecida por la demandante y rendida por don Fernando Sergio Coulon Larrañaga, quien legalmente juramentado y sin tacha, expone al tenor de la prueba, lo siguiente:

Al primer punto de prueba, esto es, efectividad que don Edmundo Patricio Maillard Mancilla, fue reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por el Estado de Chile, el testigo señala que no le consta que haya sido reconocido como tal, pero afirma que estuvo detenido junto a él, siendo objeto de varias vejaciones.

Al segundo punto de prueba, esto es, la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados por la demandante, el testigo señala que



desconoce el monto de los perjuicios que el actor alega, pero que conoce de la existencia de ellos ocasionados por las vejaciones experimentadas. Repreguntado, indica que al actor no le fue fácil encontrar trabajo una vez liberado, constándole que trabajó por cuenta propia.

QUINTO: Que, para una idónea exposición del asunto controvertido y habiéndose opuesto por la demandada diversas excepciones, se analizará cada una de ellas separadamente, empezando por la prescripción.

I.- EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

SEXTO: Que, para ello, resulta indispensable señalar que la prescripción extintiva constituye un principio general de Derecho, que adquiere presencia plasmándose positivamente en todos los espectros de los distintos ordenamientos jurídicos, resultando excluida, sólo en aquellos casos en que por ley o atendida la naturaleza de la materia se establece la imprescriptibilidad de las acciones.

Ahora bien, de no considerarse así, la regla general es que no existiría la seguridad jurídica y por tanto, determinados actos se mantendrían indefinidamente en el tiempo en una suerte de incertidumbre que sólo generaría una inestabilidad indefinida en las relaciones jurídicas de todo tipo y no permitiría dar por limitado el ejercicio de la acción indemnizatoria, lo que resulta contrario a toda lógica y hermenéutica jurídica, incluido este tipo de reparación.

SÉPTIMO: Que, para efectos de corroborar la tesis señalada precedentemente, se encuentra lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, el cual señala que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado; adicionalmente, existen innumerables preceptos de este Código que hacen mención al Estado en el orden patrimonial, y sólo por hacer referencia algunos de ellos, se encuentran los artículos 547 inciso segundo, 983, 995, 1250, 1579, 2472 N° 9, 2481 N° 1, 2497 y 2591, no siendo ninguna de estas normas, objeto de cuestionamientos doctrinarios ni jurisprudenciales.

OCTAVO: Que en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, cabe hacer presente que si bien existen instrumentos internacionales ratificados por Chile que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes e infracciones graves en contra de las personas –por ejemplo, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad- en ellos se consagra únicamente la imprescriptibilidad de la acción penal, mas no de la



acción civil que, como se viene razonando, se encuentra regulada en Chile por el Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

De esta manera, la Convención de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra –que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades incurridas por ellas, por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referida a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que alude a actos contra las personas o bienes citando al efecto, homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar, de propósito, grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente a tenor de las prescripciones del Convenio.

Del mismo modo, la supuesta vulneración de la Convención Americana, tampoco ocurre, pues no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por la demandante. Además, debe tenerse en consideración que dicho ordenamiento fue promulgado mediante Decreto Supremo N° 873 y publicado en el Diario oficial el 5 de enero de 1991, es decir, después de los hechos que motivan este juicio.

Por lo demás, los artículos citados por el actor sólo consagran un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esta Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna e impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. En consecuencia, es evidente que ninguno de los preceptos citados impide aplicar el derecho propio de cada país.

NOVENO: Que así lo ha establecido además nuestra Excma. Corte Suprema en numerosos fallos, emitiendo, en pleno, un pronunciamiento en el aspecto civil de causas sobre indemnización por violaciones a los derechos humanos, quienes en su voto mayoritario establecieron que la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional,. Situación que comparte esta Juez.

A mayor abundamiento, la misma jurisprudencia, sostiene que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de



Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal.

En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.

Con la sola salvedad del plazo desde el cual empieza a correr la prescripción, el que debe contarse desde que la víctima tuvo la certeza del ilícito perpetrado y no desde la fecha de las detenciones, estimándose que este hecho se produjo con la publicación del Informe de la Comisión Presidencial y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el año 2004.

DÉCIMO: Que por tanto, al haberse ejercido en el caso sublite una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que por lo demás no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

DÉCIMO PRIMERO: Que concluyendo en esta materia, entonces, no existe norma expresa ni en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como tampoco una norma interna que se encuentre comprendida en nuestro ordenamiento jurídico que haga **imprescriptibles** los efectos patrimoniales de los delitos declarados imprescriptibles por nuestro ordenamiento; así, no resulta pertinente aplicar por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, lo cual implicaría apartarse del claro mandato de la Ley y principios fundamentales de la institución de la prescripción, tales como, la certeza jurídica, que resulta transversal a todas las ramas del derecho, constituyendo de esta manera cualquier argumentación contraria sólo una ficción legal, que atenta contra la finalidad indiscutible que tiene este tipo de indemnizaciones, las cuales incuestionablemente son de carácter patrimonial y, por ende, prescriptibles.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en la especie, la acción intentada en el presente juicio es de claro contenido patrimonial, ya que a través de ella persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado,



solicitando el demandante la suma de \$70.000.000 o aquella que esta sentenciadora, estime pertinente, por concepto de daño moral.

DÉCIMO TERCERO: Que así las cosas, y no existiendo norma alguna que en el ámbito civil que se refiera a la imprescriptibilidad de estas acciones, no cabe sino aplicar las normas de derecho interno que rigen las acciones patrimoniales y que establecen la prescripción; la cual, en el caso de marras es de 4 años, en conformidad a lo previsto por el artículo 2332 del Código Civil.

DÉCIMO CUARTO: Que dicho lapso deberá computarse, de acuerdo a lo sostenido por la Excma. Corte Suprema, desde la publicación del Informe de la Comisión Presidencial y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el año 2004; y, habiéndose notificado la presente demanda con fecha 18 de enero de 2018, se observa que se encuentra vencido largamente el plazo de prescripción de la acción respectiva, haciendo imperativo, por tanto, y resultando este sólo hecho suficiente para acoger la excepción de prescripción extintiva interpuesta por el demandado Fisco de Chile, respecto del demandante.

II. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN REPARATORIA INTEGRAL:

DÉCIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente esta sentenciadora hará una referencia a la segunda excepción opuesta por el Fisco conforme indicó la demandada en su contestación, esto es la excepción de reparación integral al demandante por haber sido ya indemnizado, para lo cual identifica las prestaciones en dinero y otros medios de compensación destinados a reparar a las víctimas, tales como reparaciones directas en dinero, haciendo presente que al año 2015, el Estado había desembolsado la suma de \$706.387.596.727, pensiones, bonos, asignación de derechos y gratuidad en prestaciones médicas a través del programa de reparación y atención integral de salud, beneficios educacionales, continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores entre otros, como también reparaciones simbólicas, tales como memoriales, museos y otros; exponiendo que la reparación tiene un carácter sumamente complejo, reiterando que existen mecanismos de compensación propios de nuestro derecho interno y otros emanados de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DÉCIMO SEXTO: Que, la actora indicó en síntesis y en lo que resulta pertinente al respecto, que las pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos, en ningún caso reparan íntegramente las graves violaciones a



los derechos humanos, no siendo en ningún caso incompatibles, la pensión de sobrevivencia con cualquier indemnización por daño moral, presupuesto que en todo caso no resulta una cuestión pacífica en nuestro ordenamiento jurídico y que debe ser probado.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que así las cosas el Fisco alega que se realizaron distintas prestaciones y por distintos conceptos para reparar el daño causado, no obstante ello, ninguna prueba rindió en orden a acreditar fehacientemente respecto al Señor Santiago Quintanilla en específico el pago o beneficios que indica en su defensa, correspondiéndole a él el peso de la prueba en esta materia; en conclusión sólo hizo referencia genérica a las demás situaciones similares pero no al caso sublite; por lo que esta excepción, será rechazada.

DÉCIMO OCTAVO: Que en atención a lo ya arribado, las demás alegaciones, expuestas en subsidio, como también prueba allegada, tales como personerías, el excesivo monto pretendido y la improcedencia del pago de reajustes e intereses, en nada altera a lo que se lleva razonado,

Y VISTOS lo dispuesto en los artículos 1698, 2.314 y siguientes, 2332 y 2492 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 341, 342, 356 y siguientes y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123 y sus modificaciones, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de personas que señala; Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; Convenios de Ginebra de 1949; Convención Americana de Derechos Humanos; Constitución Política de la República de Chile y demás normas pertinentes, **SE RESUELVE:**

I. Que se acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile; y en consecuencia, se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios incoada al folio 1 por el demandante señor Edmundo Mauricio Maillard Mancilla.

II. Que se rechaza la excepción de reparación integral opuesta por la demandada, Fisco de Chile, por las razones expresadas en el motivo décimo séptimo de este fallo.

III. Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol: C- 34.921-2017.-



Dictada por Doña Sylvia Papa Beletti, Juez Titular.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciséis de Septiembre de dos mil diecinueve.-**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>